



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Abril veintinueve (29) de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05001- 31- 05-**015-2017-00666-01**
Demandante: LILIAM DEL SOCORRO ÁLVAREZ ORTIZ
Demandada: SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: CONTRATO DE TRABAJO – PRESTACIONES SOCIALES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Decisión que se emite de manera escrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Con su demanda, la parte actora pretende la declaratoria de la existencia de una relación de trabajo con la demandada desde el 6 de agosto de 1992 y el 30 de noviembre de 2016, en subsidio a ello, solicita la declaratoria de dicha relación entre el 5 de febrero de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2008 (sic); en ambos casos, solicita se declare que la demandada en todo el tiempo de la relación laboral no efectuó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y vacaciones; que la pasiva incumplió su obligación de pagar a la AFP a la que se encontraba afiliada la demandante, los aportes e pensiones durante el término de vigencia del vínculo contractual, así como de entregar los comprobantes de pago de los aportes al SGSS y parafiscales de los últimos 3 meses;

que el vínculo contractual terminó de manera unilateral, ilegal e injusta, por lo que solicita se imponga condena por los siguientes conceptos: prestaciones sociales y vacaciones por todo el tiempo laborado, auxilio de transporte, dotación y vestido de labor, indemnización por despido injusto indexada, sanción de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, pago de aportes al sistema general de seguridad social en la AFP que se encuentra afiliada la demandante, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Frente a dichas pretensiones, la juez de primera instancia fijó el litigio en determinar si entre las partes existió una relación laboral a término indefinido entre el 6 de agosto de 1992 y el 30 de noviembre de 2016, o en subsidio entre el 15 de febrero de 2008 al 30 de noviembre de 2016; si durante la vigencia del vínculo laboral la demandada no pagó las prestaciones sociales, vacaciones, aportes en pensiones, si no entregó los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los últimos 3 meses, si el vínculo terminó de manera unilateral e injusta por parte de la sociedad demandada; y si como consecuencia de lo anterior, se debía condenar a la Sociedad San Vicente de Paúl de Medellín a reconocer las prestaciones sociales y vacaciones por todo el tiempo laborado, el auxilio de transporte, dotación y vestido de labor, indemnización por despido injusto indexada, la sanción por el no pago de prestaciones sociales, la sanción por la no consignación de cesantías a un fondo, pago de aportes a la AFP en la que se encontraba afiliada la demandante, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

La *a quo*, tras considerar que la parte activa no demostró que existió subordinación al interior de la relación sostenida con la demandada entre el 15 de febrero de 2008 al 30 de noviembre de 2016, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra e impuso condena en costas a cargo de la parte activa en la suma de \$781.242.

La parte demandante aspira a que se revoque la decisión de primera instancia, pues a su criterio, se encontraba en cabeza de la pasiva desvirtuar la presunción de la subordinación, por cuanto fue aceptado por el mismo representante legal de la

demandada la prestación personal del servicio por parte de la señora Liliam del Socorro como profesora, siendo desconocido por la juez de primera instancia que por las mismas labores que fue contratada en el año 2008, a la demandante le había sido celebrado un contrato de trabajo entre 1992 y 2001.

ALEGATOS

Dentro del término de traslado que trata el decreto 806 de 2020, la parte demandante solicita sea revocada la decisión de primera instancia, pues en la decisión adoptada no se tuvo en cuenta lo que de antaño ha sostenido la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo cuando al interior de un proceso como el presente, se logra demostrar la prestación personal del servicio por la parte actora. Al efecto, menciona la sentencia del 14 de agosto de 2012, radicada con el número 40.011, en la que se indicó que, probada la prestación personal del servicio, se presume la subordinación y el contrato de trabajo, por lo que desvirtuar la presunción de la existencia de la relación laboral corría por cuenta de la demandada, lo que en momento alguno sucedió

Por su parte, La Sociedad San Vicente de Paúl solicita la confirmación de la decisión proferida en primera instancia, por cuanto al interior del expediente se encuentra probado que entre las partes si bien existieron dos relaciones contractuales, éstas fueron de naturaleza diferente, sin que, en la segunda, la demandante pudiera probar la subordinación que alega y, la pasiva por el contrario, demostró que el contrato efectivamente era de prestación de servicios, sin subordinación o dependencia.

CONSIDERACIONES

Es importante poner de presente que, a partir de las pruebas aportadas al proceso, en esta instancia se encuentran por fuera de discusión los siguientes presupuestos fácticos: *i)* Que entre las partes existió un contrato de trabajo el cual fue ejecutado entre el 1 de agosto de 1992 al 31 de agosto de 2001 (fls. 27, 67 y 68) y *ii)* que entre las

partes fue suscrito contrato de prestación de servicios, el cual se ejecutó entre el 15 de febrero de 2008 y 30 de noviembre de 2016, en el que se pactaron como honorarios para el año 2008 la suma de \$550.000 mensuales (fls. 28 a 29, 61 a 62 y confesión realizada por la demandante en el hecho 6 de la demanda fl. 2)

En este orden de ideas y en virtud del principio de congruencia, le corresponde a esta Corporación determinar, si en atención a la primacía de la realidad sobre las formas, entre la demandante y la sociedad demandada existió una relación de trabajo entre el 6 de agosto de 1992 y el 30 de noviembre de 2016, o en subsidio, entre el 15 de febrero de 2008 al 30 de noviembre de 2016 con las obligaciones que ello conlleva, esto es, reconocimiento y pago de prestaciones sociales, vacaciones, subsidio de transporte, dotación de calzado y vestido y aportes en pensiones; si el vínculo terminó de manera unilateral e injusta por parte de la sociedad demandada; si hay lugar a reconocer las indemnizaciones contempladas en los artículo 64, 65 del CST y la del artículo 99 de la ley 50 de 1990, y finalmente, si procede la indexación de los valores objeto de condena.

Pues bien, como es sabido el contrato de trabajo no existe en el acuerdo abstracto de voluntades sino en la materialización de la prestación del servicio, por ende, esto último y no el acuerdo verbal o escrito, es lo que determina su existencia (Art 53 CP). Así, en el artículo 23 del CST, se señalan como elementos de este tipo de contratos: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario.

Ahora bien, según el artículo 24 del mismo estatuto, debe presumirse que *toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo*. Por lo tanto, si en un proceso se establece que se dio una prestación personal de servicios remunerada y se desconoce si fue subordinada o no, o subsiste duda a este propósito, deberá el respectivo juez concluir que la relación estuvo regida por un contrato de trabajo con las consecuencias jurídicas que ello pueda aparejar. Ello no significa, como lo ha dicho el órgano de cierre “....que tal presunción haya pretendido abolir las relaciones laborales independientes, ni en modo alguno las descartó...”, pues al contrario supone que el concepto de relación de trabajo es un género que contiene especies diversas entre las cuales, fuera de la modalidad subordinada, se hallan las prestaciones de servicios que

en modo independiente y bajo diversas expresiones contractuales se pueden efectuar. Solo que el artículo 24 *“...en desarrollo del concepto de protección al trabajador consagra la presunción enunciada, de forma que este se halla liberado de acreditar la subordinación...cosa que no impide que aparezca la prueba de que el vínculo en cuestión en realidad fue independiente...”* (Ver Sentencias de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Radicado 14096 del 27 de junio de 2000 y SL 663-2018).

Por manera que, siguiendo las reglas generales de la carga de la prueba (art 164 y 167 del CGP), corresponde al trabajador, para favorecerse de la presunción aludida, acreditar con suficiencia que prestó un servicio personal para quien se reputa empleador. Y a este último, si aspira a desvirtuarla, que la labor fue autónoma e independiente.

Con base en esas precisiones, se tiene que, en el presente caso, entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 1 de agosto de 1992 y el 31 de agosto de 2001 (fls. 27, 67 y 68), en la cual, según los decires de la demandante en su interrogatorio de parte (min 26:00 a 36:00), le fueron canceladas todas las prestaciones sociales y su seguridad social.

Ahora, si bien el representante legal de la demandada mencionó en su interrogatorio (min 10:00 a min 24:00) que la demandante entre 1992 a 2016 se desempeñó como docente de máquinas de coser, la Sala no analizará los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 2001 al 14 de febrero de 2008, por cuanto la misma demandante en su interrogatorio confesó que en este periodo celebró un contrato de trabajo con el señor Ignacio Jaramillo, sujeto éste ajeno al proceso, sin que, más allá de los decires de la demanda, obre prueba al interior del expediente de la responsabilidad o solidaridad entre Ignacio Jaramillo y la aquí demandada o mucho menos que existiera un vínculo o una prestación personal del servicio en forma simultánea o concomitante con la sociedad demandada.

Así las cosas, el análisis de la eventual existencia de un contrato de trabajo se limita a la relación existente entre las partes ejecutada entre el 15 de febrero de 2008 y 30 de noviembre de 2016.

De la respuesta a la demanda, de la documental aportada al plenario por ambas partes y las confesiones dadas en los interrogatorios de parte a que se ha hecho referencia, se revela que la actora prestó sus servicios como docente de máquinas de coser en favor de la sociedad demandada entre el 15 de febrero de 2008 y 30 de noviembre de 2016, cuya remuneración de las mismas no se cuestiona por las partes.

En este punto, es importante mencionar que, conforme a la jurisprudencia atrás citada y contrario a lo manifestado por la juez de primera instancia, la subordinación era un elemento que no debía ser probado por la activa, sino que, por el contrario, desvirtuado por la pasiva, lo cual no se presentó al interior del presente proceso.

En efecto, partiendo de los documentos aportados, se tiene que a fls. 28 a 29 y 61 a 62 se encuentra el contrato de prestación de servicios celebrado por la demandante y la sociedad llamada a juicio, en el cual se menciona que su objeto será el de *“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE MÁQUINAS”*, a su vez, a fl. 68 reposa copia del contrato de trabajo celebrado por las mismas partes el 1 de agosto de 1992, en el que se establece que el oficio a desempeñar por la trabajadora era el de *“PROFESORA DE MAQUINA PLANA”*, ahora bien, lo anterior, en concordancia con lo expuesto por el representante legal de la demandada (min 10:00 a min 24:00) quien mencionó que la señora Liliam del Socorro siempre se desempeñó como docente de máquinas de coser; lo que implica que la activa desempeñaba las mismas funciones en ambos vínculos contractuales acreditados, sin que se allegase prueba alguna de parte de la accionada en el sentido de fundamentar la razón por la cual el último de los contratos celebrados carecía de la naturaleza de una relación laboral, en tanto que al primero de ellos sí se le dio tal calidad.

Con relación a los testimonios traídos por la parte demandada, Margarita Elena Henao Mejía (min 1:03:00 a 1:19:00) y de Gloria Elena Zapata Quintero (min 1:35:00 a 1:42:00), la Sala considera que los mismos no tienen el suficiente peso para desvirtuar la presunción del artículo 24 del CST.

En efecto, Margarita Elena Henao Mejía, presidente de la sociedad demandada por más de 10 años, indicó que conoció a la demandante hace más de 15 años porque era voluntaria en la Sociedad San Vicente de Paúl y dictaba clases como docente, pero mencionó que no tuvo contacto con la actora, ni tampoco conoció los contratos o los horarios en los que desempeñaba sus funciones. Por su parte, Gloria Elena Zapata Quintero, Coordinadora en el programa de alimentación de la sociedad demandada, indicó desconocer las condiciones en las que la demandante prestaba sus servicios, pues solo visitaba las sedes en las que la actora desempeñaba sus funciones cada 2 o tres meses.

Por lo anterior, ha de entenderse que el vínculo que rigió a las partes lo fue de naturaleza laboral.

Conclusión ésta a las que no arribó la juzgadora de primer grado, por lo que es procedente el recurso de apelación interpuesto por la demandante, debiendo ser **REVOCADA** la decisión adoptada y en consecuencia, se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre la demandante y la Sociedad San Vicente de Paúl entre el 15 de febrero de 2008 y el 30 de noviembre de 2016.

De acuerdo con lo dicho por esta Sala, a consecuencia de la declaración de la existencia del contrato de trabajo entre el 15 de febrero de 2008 y el 30 de noviembre de 2016, la demandante tiene derecho a que se le reconozca y paguen las vacaciones y demás prestaciones establecidas para los contratos de trabajo en general. No obstante, se advierte la prosperidad de la excepción de prescripción la cual opera en las obligaciones exigibles con anterioridad al 14 de agosto de 2014, conforme a lo dispuesto los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ya que no hay prueba de interrupción de la

prescripción, pues la relación de trabajo terminó el 30 de noviembre de 2016 y la demanda fue presentada el 14 de agosto de 2017 (fl. 13).

Por su parte, las cesantías sí se reconocerán por todo el periodo declarado, por cuanto el pago de las mismas se causa con la terminación de la relación laboral, caso contrario ocurre con los intereses a estas, a los cuales si les operó el fenómeno prescriptivo.

LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS

- **Determinación de salario**

Partiendo de los honorarios acordados por las partes en el contrato de prestación de servicio referido con anterioridad, evidencia la Sala que el salario pactado para el año 2008 ascendía a la suma de \$550.000 mensuales.

Ahora, a efectos de determinar el salario entre el año 2009 a 2016, se tiene que a fls. 19 a 25 fueron aportados algunos comprobantes de egreso correspondientes a servicios prestados durante los años 2009, 2010 y 2011.

Respecto del año 2009 la Sala concluye que la asignación salarial promedio de la demandante para esta anualidad ascendía a la suma de \$ 501.325 por las siguientes razones: Fueron aportados los comprobantes de pago 0203981 del 29/08/28 por valor de \$275.000 y el 0203858 del 2009/07/30 por el mismo valor, ahora, como el mismo contrato de prestación de servicios establece que los pagos se efectuarían de manera quincenal y como no se tiene prueba de los restantes valores efectivamente cancelado para esta anualidad, no queda otro camino que concluir que los restantes pagos se efectuaron de manera quincenal por el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente así:

2009			
Mes	Quincena	Quincena 2	Total
Enero	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Febrero	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Marzo	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Abril	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Mayo	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Junio	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Julio	\$ 248.450	\$ 275.000	\$ 523.450
Agosto	\$ 248.450	\$ 275.000	\$ 523.450
Septiembre	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Octubre	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Noviembre	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
Diciembre	\$ 248.450	\$ 248.450	\$ 496.900
	Promedio		\$ 501.325

Para el año 2010, se tiene que fueron allegados los comprobantes 3959153 del 2010/12/15 por valor de \$294.675, el 3959114 del 2010/11/30 por \$294.675, el 3959089 del 2010/11/12 por \$294.675, el 3959029 del 2010/10/14 también por \$294.675, el 3958972 del 2010/09/29 por \$294.675, el 3958942 del 2010/09/14 por \$294.675, el 2367345 del 2010/07/15 por \$294.675, el 2367219 del 2010/06/15 por \$294.675, el 2367143 del 2010/05/28 por \$294.675 y el 2367089 del 2010/05/14 por \$294.675. La sala no dará valor al comprobante 3958971 del 2010/09/29 obrante a fl. 21, por cuanto el mismo refiere a una persona diferente a la demandante. Bajo los mismos razonamientos atrás expuestos, se concluye que los restantes pagos se efectuaron al menos por lo equivalente al salario mínimo, lo que lleva a concluir que el salario promedio de la demandante para esta anualidad fue \$545.979, así:

2010			
Mes	Quincena	Quincena 2	Total
Enero	\$ 257.500	\$ 257.500	\$ 515.000
Febrero	\$ 257.500	\$ 257.500	\$ 515.000
Marzo	\$ 257.500	\$ 257.500	\$ 515.000
Abril	\$ 257.500	\$ 257.500	\$ 515.000
Mayo	\$ 294.675	\$ 294.675	\$ 589.350
Junio	\$ 294.675	\$ 257.500	\$ 552.175
Julio	\$ 294.675	\$ 257.500	\$ 552.175
Agosto	\$ 257.500	\$ 257.500	\$ 515.000
Septiembre	\$ 294.675	\$ 294.675	\$ 589.350
Octubre	\$ 294.675	\$ 257.500	\$ 552.175
Noviembre	\$ 294.675	\$ 294.675	\$ 589.350
Diciembre	\$ 294.675	\$ 257.500	\$ 552.175
	Promedio		\$ 545.979

Frente a los comprobantes de pago del año 2011, se tiene que la demandante aportó el 3959303 del 2011/02/15 por \$306.450, 5008840 del 2011/08/11 por \$306.450 el 5008763 del 2011/07/14 por valor de 306.450 y el 5008431 del 2011/03/30 por \$306.450. Se concluye también que los restantes pagos se efectuaron al menos por el equivalente al salario mínimo para esta anualidad, lo que lleva a concluir que el salario promedio de la demandante para el año 2011 ascendía a la suma de \$548.483, así:

2011			
Mes	Quincena	Quincena 2	Total
Enero	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Febrero	\$ 306.450	\$ 267.800	\$ 574.250
Marzo	\$ 267.800	\$ 306.450	\$ 574.250
Abril	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Mayo	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Junio	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Julio	\$ 306.450	\$ 267.800	\$ 574.250
Agosto	\$ 306.450	\$ 267.800	\$ 574.250
Septiembre	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Octubre	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Noviembre	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Diciembre	\$ 267.800	\$ 267.800	\$ 535.600
Promedio			\$ 548.483

Al no contar con relación de pagos por los años comprendidos entre 2012 a 2016, se colige que lo devengado por la demandante ascendía al menos al salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad. Por lo anterior y para efectos prácticos, los salario sobre el que se harán las operaciones a las que haya lugar fueron los siguientes:

Año	Salario
2008	\$ 550.000
2009	\$ 501.325
2010	\$ 545.979
2011	\$ 548.483
2012	\$ 566.700
2013	\$ 580.500
2014	\$ 616.000
2015	\$ 644.350
2016	\$ 689.455

- **Cesantías e intereses sobre las cesantías**

Art 253 CST. Se promedia con el salario devengado por cada año

Año	Cesantías	Intereses
2008	\$ 550.000	Prescritos
2009	\$ 501.325	Prescritos
2010	\$ 545.979	Prescritos
2011	\$ 548.483	Prescritos
2012	\$ 566.700	Prescritos
2013	\$ 580.500	Prescritos
2014	\$ 616.000	\$ 73.920
2015	\$ 644.350	\$ 77.322
2016	\$ 689.455	\$ 82.735
Total	\$ 5.242.792	\$ 233.977

- **Indemnización artículo 5 del Decreto 116 de 1976. (intereses doblados)**

Teniendo en cuenta que la no cancelación de los intereses a las cesantías da lugar al pago de una indemnización correspondiente al mismo valor de los intereses, es decir que el empleador tendría que pagarlos al doble, se condenará a la demandada al pago de **\$233.977**, por concepto de la indemnización del artículo 5 del Decreto 116 de 1976.

Prima de servicios.

Art 306 CST. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado.

El código laboral no fijó cómo se liquida, ni la base sobre la cual se debe liquidar, por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia han dispuesto que se debe liquidar sobre el promedio del salario del semestre respectivo

Año	Prima
\$ 2.014	\$ 308.000
\$ 2.015	\$ 644.350
\$ 2.016	\$ 632.000
Total	\$ 1.584.350

- **Vacaciones:**

Numeral 1 artículo 187 CST, como la exigibilidad de las vacaciones es dentro del año subsiguiente al de su causación, se condenará a las causadas en los periodos 2014 - 2015, 2015 – 2016 y la proporción del año 2016, en la medida que las vacaciones se causaban los días 15 de febrero de cada año.

Art. 192 CST. Se liquidan con el salario al momento de salir a vacaciones.

Periodo vacaciones	Vacaciones
2014-2015	\$ 308.000
2015-2016	\$ 322.175
2016	\$ 272.909
Total	\$ 903.084

- **Indemnización art. 64 CST.**

Como es sabido, cuando se pretende por vía judicial la indemnización del art 64 del CST, le corresponde al trabajador demostrar el despido, y al empleador para desligarse de esa obligación, la justa causa comprobada que lo llevó a tomar esa decisión.

Pues bien, en el presente caso, la parte demandante allegó documento fechado del 28 de octubre de 2016 (fl. 26), mediante el cual el empleador da por terminado unilateralmente el vínculo entre las partes a partir del 16 de diciembre de ese año sin que se esgrimiera una justa causa legal para ello, lo que implica necesariamente la imposición de la sanción prevista en el art. 64 del CST.

Por lo anterior, en atención a lo dispuesto en el literal a) del citado artículo 64, por concepto de indemnización por despido injusto adeuda la demandada a la activa la suma de **\$4.270.714¹**.

¹ Equivalente a 185.83 días de salario.

- **Indemnización art. 65 CST.**

Es de recordar que la jurisprudencia nacional ha sostenido de manera reiterada y pacífica que no son de imposición automática, en la medida en que, dado su carácter sancionatorio, es preciso auscultar la conducta asumida por el deudor, en aras de verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su conducta omisiva y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. (Ver SL15507-2015, SL16884 – 2016 SL053-2018 entre otras).

En el *sub examine*, la pasiva no esbozó ninguna circunstancia que justificara el no pago. Obsérvese que la conducta desplegada por la demandada siempre fue en su calidad de empleadora, al punto que no pudo acreditar en el plenario que el vínculo suscitado con la activa tuviera una naturaleza diferente, esto es, autónoma e independiente, y al contrario lo que se deja ver es que la modalidad ofrecida solo propendía por el desconocimiento de los réditos laborales.

Por manera que, no existiendo un actuar provisto de buena fe por parte de la pasiva, debe ser condenada al pago de la sanción aludida. Ahora bien, es preciso destacar que esta norma distingue entre asalariados que devenguen hasta un salario mínimo legal mensual vigente, o que devenguen más de un salario mínimo. Encontrándose establecido en este caso, que la demandante devengaba un salario equivalente al mínimo legal mensual vigente (acápite LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS - Determinación de salario), por ello, la sanción moratoria se calculará con base a un día de salario por cada día de retardo, por la suma de **\$22.981.83² diarios**, contados a partir del 1 de diciembre de 2016 hasta tanto se realice el pago de la obligación. Ello conforme al parágrafo 2 del artículo 65 del CST, modificado por el 29 de la Ley 789/ 2002.

- **Indemnización moratoria art. 99 ley 50 de 1990.**

Ha sido posición reiterada de esta Sala que la misma procede en el caso de que el empleador incumple su obligación de consignar las cesantías a más tardar al 15 de

² Promedio diario del salario hallado por la sala

febrero siguiente a la anualidad de su causación, lo que supone que para esa fecha el contrato de trabajo se encuentre vigente, pues de no ser así (si el contrato termina antes de esa data), las cesantías se pagarán directamente al trabajador (art 249 CST), y se incluyen como una prestación social en la sanción del art 65 del CST en el evento de su no cancelación (Ver SL2479-2018)

Por ello, en el caso de marras procede esta sanción para los periodos de 2014 y 2015, por cuanto los anteriores periodos se encuentran prescritos. Por el periodo de 2016 corre la sanción del art. 65 en los términos expuestos anteriormente.

Ha de advertirse que la sanción analizada se causa desde el 15 de febrero de cada año hasta el 14 de febrero siguiente, cuando inicia la otra mora y, en todo caso, hasta cuando finaliza la relación laboral (Ver SL4260-2020). Así, habrá de reconocerse la sanción en cuestión por el periodo 2014 desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 14 de febrero de 2016 y, la del periodo 2015, entre el 15 de febrero de 2016 hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad, pues a partir del siguiente día comenzó a operar la sanción del artículo 65 del CST.

Año	Periodos		Salario	Salario día	Días	Total
2014	15/02/2015	14/02/2016	\$ 616.000	\$ 20.533,33	360	\$ 7.392.000,00
2015	15/02/2016	30/11/2016	\$ 644.350	\$ 21.478,33	285	\$ 6.121.325,00
Total						\$ 13.513.325,00

- **Indexación.**

A excepción de las vacaciones, por no ser éstas prestación social, no hay lugar a conceder esta pretensión respecto de los demás valores concedidos, por cuanto con las indemnizaciones atrás referidas no solo se cubre la actualización monetaria, sino que incluso, se supera el valor de la misma. En este orden de ideas, a excepción de las vacaciones, la actualización de los valores sobre el monto que debe pagar la accionada ya se encuentran incluidas en las sanciones reconocidas.

Por lo anterior, solo habrá de condenarse a la demandada al pago de la indexación de las vacaciones adeudadas así: las vacaciones causadas en el periodo 2014 – 2015 se indexaran a partir del 16 de febrero de 2015 hasta la fecha en la que se realice el pago efectivo, y las causadas en el periodo 2015 – 2016 se indexarán a partir del 16 de febrero de 2016 y la proporción de las vacaciones causadas al 30 de noviembre de 2016 se indexan a partir del 1 de diciembre de 2016 hasta la fecha en la que se realice el pago efectivo.

- **Aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones.**

A fl. 66 obra copia de la resolución N° 015477 de 1999, por medio de la cual a la demandante le fue reconocida pensión de vejez a partir del 1 de diciembre de 1999, razón por la cual, se está excluida del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones desde dicha fecha, no siendo viable imponer condena al pago de estas cotizaciones, ya que la obligación del empleador de hacer aportes cesa cuando el trabajador ha alcanzado el mínimo de semanas para obtener la pensión mínima de vejez (Art 4 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del art 17 de la ley 100 de 1993)

- **Dotación de vestido y calzado laboral**

En lo atinente a la dotación de vestido y calzado laboral, probatoriamente no se allegaron facturas o evidencias de un real detrimento patrimonial causados por la falta de tales elementos, sin que proceda una compensación en dinero por tal carencia, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de la SCL CSJ (al respecto la sentencia CSJ SL 15 abr. 1998, rad. 10400)³

³ “(...) Se deriva por tanto que a la finalización del contrato carece de todo sentido el suministro pues se reitera que él se justifica en beneficio del trabajador activo, más en modo alguno de aquel que se halle cesante y que por obvias razones no puede utilizarlo en la labor contratada. De otra parte no está previsto el mecanismo de la compensación en dinero y, antes por el contrario, el legislador lo prohibió en forma expresa y terminante en el artículo 234 del Código Sustantivo.

No significa lo anterior que el patrono que haya negado el suministro en vigencia del vínculo laboral, a su terminación quede automáticamente redimido por el incumplimiento, pues ha de aplicarse la regla general en materia contractual de que el incumplimiento de lo pactado genera el derecho a la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y en favor de la afectada. En otros términos el empleador incumplido deberá la pertinente indemnización de perjuicios, la cual como no se halla legalmente tarifada ha de establecerla el juez en cada caso y es claro que puede incluir el monto en dinero de la dotación, así como cualquier otro tipo de perjuicios que se llegare a demostrar.”

- **Auxilio de transporte.**

Ha de indicarse que no basta con que se devenguen menos de dos SMLMV y que se viva a más de un kilómetro de distancia, puesto que se configuran algunas excepciones frente a la posibilidad de acceder a dicho beneficio, como son: (i) si el trabajador vive en el mismo lugar de trabajo, es decir, cuando el traslado no le implica un costo o mayor esfuerzo, y (ii) si la empresa suministra gratuitamente y de manera completa el servicio de transporte. (ver SL2169-2019).

En el sub exime no se da cuenta de la necesidad de un transporte, puesto que la activa no demostró que viviera a más de un kilómetro de distancia del lugar en el que prestaba sus servicios.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos objeto de apelación.

Finalmente, por revocarse la decisión recurrida, costas en ambas instancias a cargo de la Sociedad San Vicente de Paúl, se fijan como agencias en derecho de la alzada el equivalente a 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, decide: **REVOCAR** la sentencia de primera instancia, y en su lugar **DECLARAR** que entre LILIAM DEL SOCORRO ÁLVAREZ ORTIZ y la SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 15 de febrero de 2008 y el 30 de noviembre de 2016. **DECLARAR** probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de las obligaciones exigibles con anterioridad al 14 de agosto de 2014 en los términos expuestos en la parte motiva. **CONDENAR** a la SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL a cancelar a la demandante **\$5.242.792** por cesantías, **\$233.977** por intereses a las cesantías; **\$233.977** por la sanción del artículo 5 del Decreto 116 de 1976; **\$1.584.350** por primas legales; **\$903.084** por vacaciones; a la indexación de las vacaciones en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia; **\$4.270.714** por concepto

de la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo; a la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo a razón de **\$22.981,83 diarios**, contados a partir del 1 de diciembre de 2016 hasta tanto se realice el pago de la obligación; al pago de la sanción del artículo 99 de la ley 50 de 1990 por los periodos de 2014 y 2015 así: periodo 2014 desde el 16 de febrero de 2015 hasta el 15 de febrero de 2016 y periodo 2015 entre el 16 de febrero de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016 para un total de **\$13.513.325**. Y finalmente, **ABSOLVER** a la demandada de las restantes pretensiones formuladas en su contra.

Costas en ambas instancias a cargo de la SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL, se fijan como agencias en derecho de la alzada en 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YÉPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 74 publicados por medios digitales el 3 de mayo de 2021